

CONVENIO POR EL QUE EL «TRIBUNAL CONSTITUCIONAL» ENCOMIENDA A LA «FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA», LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS

Madrid, a 27 de diciembre de 2018

REUNIDOS

De una parte, don Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por Real Decreto 281/2017, de 22 de marzo (BOE núm. 70, de 23 de marzo), en representación del Tribunal Constitucional [artículo 15 de la Ley Orgánica, 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 239, de 5 de octubre)], con domicilio en Madrid, calle Domenico Scarlatti, 6 (Código de Identificación Fiscal núm. S2813013F).

Y de otra, don Jaime Sánchez Revenga, Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, nombrado por Real Decreto 286/2012, de 27 de enero (BOE núm. 24, de 28 de enero), en representación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda [artículo 19.2 del Real Decreto 114/1999, de 25 de junio, por el que sea aprueba el Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (BOE núm. 161, de 7 de julio)] con domicilio en Madrid, calle Jorge Juan, 106 (Código de identificación Fiscal Q28/26004J).

Ambas partes, reconociéndose respectivamente capacidad legal y competencia suficientes para formalizar el presente Convenio,

EXPONEN

PRIMERO.- De conformidad con los arts. 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “[l]os interesados podrán identificarse electrónicamente (...) a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad”, y, en particular, mediante sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos expedidos por prestadores incluidos en la ‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’ [letras a) y b)], que se elabore al amparo de lo previsto tanto en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos relacionados con las listas de confianza, como en el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación

electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE

Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece, como uno de los principios generales de actuación la cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas, principios que se desarrollan en el Título III de esta Ley, utilizando instrumentos como la encomienda de gestión regulada en su artículo 11.

SEGUNDO.- El artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, bajo el título "*Prestación de servicios de seguridad por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos*", no sólo faculta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) para la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos (apartado 1º), sino que le habilita, tras la modificación operada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, previa formalización del correspondiente convenio, a prestar a las personas, entidades y corporaciones que ejerzan funciones públicas los citados servicios (apartado 9º).

TERCERO.- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) es uno de los prestadores de servicios de certificación incluidos en la "Lista de confianza" elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (mayo de 2018), ahora Secretaría de Estado para el Avance Digital, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

CUARTO.- Dado que es del interés del Tribunal Constitucional garantizar a los interesados que puedan relacionarse a través de medios electrónicos, y que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda está en disposición de realizar las actividades técnicas y de seguridad relativas a la certificación y firma electrónica, según sus fines institucionales, se determina por el Tribunal Constitucional encomendar a la Fábrica su realización sobre la base de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

Constituye la finalidad de este Convenio la creación del marco de actuación institucional entre las dos partes firmantes, que permita el impulso de servicios públicos electrónicos del Tribunal Constitucional, a través de la extensión al ámbito de competencias del Tribunal Constitucional de la Plataforma Pública de Certificación y de

servicios electrónicos, informáticos y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM para su uso por las diferentes Administraciones.

En particular, la actividad de la FNMT-RCM comprenderá:

1. La extensión de la Plataforma Pública de Certificación mediante la implementación de las actividades que al efecto se enumeran en los Capítulos I, II y III, del Anexo I, de este Convenio, tanto para identificación de las Administraciones Públicas, como de los ciudadanos.

También podrá integrar a petición del Tribunal Constitucional cualquiera, o la totalidad, de las funcionalidades y actividades que se enumeran en el Capítulo II, del mismo Anexo IV, de este Convenio.

2. Reconocimiento y validación de certificados a través de la Plataforma de Validación Multi-AC de la FNMT-RCM, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolló parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

3. La FNMT-RCM podrá realizar, con carácter instrumental de las anteriores y previa petición del Tribunal Constitucional, las siguientes actividades adicionales:

- Emisión de Sellos de Tiempo en las comunicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que tengan lugar al amparo del presente Convenio, previa petición del Tribunal Constitucional, a través de la Infraestructura Pública de Sellado de Tiempo de la FNMT-RCM, sincronizada mediante convenio con el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), como órgano competente del mantenimiento del Patrón Hora en España.
- Soportes de certificados en tarjeta criptográfica (según las características del Anexo IV).
- Certificados de software y componentes (según las características del Anexo IV).

SEGUNDA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. A efectos del ámbito de aplicación, quedará incluido: el Tribunal Constitucional.
2. No podrán adherirse al presente Convenio, los organismos y entidades públicas dependientes, en su caso, del Tribunal Constitucional.

TERCERA.- ACTIVIDAD DE LAS PARTES

De acuerdo con el régimen de competencias y funciones propias de cada parte, corresponde a la FNMT-RCM, de acuerdo con lo dispuesto en el objeto de este Convenio y en la normativa referida en el mismo, la puesta a disposición del Tribunal Constitucional, de la Plataforma Pública de Certificación desarrollada para la Administración Electrónica, para ofrecer seguridad en la utilización de instrumentos de identificación electrónica por parte de los ciudadanos. Estas Plataformas, junto con otras funcionalidades adicionales como el Sellado de Tiempo, permiten, a la FNMT-RCM, la realización de las actividades de carácter material y técnico en el ámbito de la securización de las comunicaciones, de la certificación y firma electrónica, cumpliendo con su mandato de extensión de la Administración Electrónica.

De otra parte, corresponde al Tribunal Constitucional la realización de las actuaciones administrativas y el desarrollo de sus competencias dirigidas a la implementación de las Plataformas en sus procedimientos.

Para la adecuada consecución del objeto de esta Encomienda, las partes han de desplegar una serie de actuaciones, que son:

1. La FNMT-RCM, realizará las siguientes actuaciones:

1.1. De carácter material, administrativo y técnico:

- Aportar la infraestructura técnica y organizativa adecuada para procurar la extensión e implementación de las Plataformas, con las funcionalidades previstas para el desarrollo de las relaciones administrativas de los ciudadanos, a través de sistemas EIT y de conformidad con lo contenido en los Anexos y el estado de la técnica.
- Aportar los derechos de propiedad industrial e intelectual necesarios para tal implementación, garantizando su uso pacífico. La FNMT-RCM, excluye cualesquiera licencias o sublicencias, a terceras partes o al Tribunal Constitucional para aplicaciones y sistemas del Tribunal Constitucional o de terceros, distintas de las aportadas para ser utilizadas, en calidad de usuarios, directamente por la FNMT-RCM, en virtud de este Convenio.
- Asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en los Anexos, con objeto de facilitar al Tribunal Constitucional la información necesaria para el buen funcionamiento de los sistemas.
- Actualización tecnológica de los sistemas, de acuerdo con el estado de la técnica y los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, sin perjuicio de la aprobación de los requisitos técnicos correspondientes por el Consejo Superior de Administración Electrónica o, en su caso, por el órgano competente.
- Aportar la tecnología necesaria para que las obligaciones del Tribunal Constitucional, puedan ser realizadas; en particular las aplicaciones necesarias

para la constitución de las Oficinas de Registro y Acreditación y la tramitación de las solicitudes de emisión de certificados electrónicos.

- Emisión de informes, a petición del Tribunal, acreditativos de la actividad de certificación realizada por la FNMT-RCM.
- Tener disponible para consulta del Tribunal Constitucional y de los usuarios una Declaración de Prácticas de Certificación (DPC), que contendrá, al menos, las especificaciones establecidas en el artículo 19 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Tal DPC, estará disponible en la dirección electrónica (URL) siguiente: <http://www.cert.fnmt.es/dpcs>

Esta DPC, podrá ser consultada por todos los interesados y podrá ser modificada por la FNMT-RCM, por razones legales o de procedimiento. Las modificaciones en la DPC serán comunicadas a los usuarios a través de avisos en su dirección electrónica.

En relación con la DPC y sus anexos es necesario tener en cuenta la Declaración de Prácticas de Certificación General y las Políticas y Prácticas de Certificación Particulares para cada tipo de certificado o ámbito de los mismos.

En todo caso, los medios técnicos y tecnología empleados por la FNMT-RCM permitirán demostrar la fiabilidad de la actividad de certificación electrónica, la constatación de la fecha y hora de expedición, suspensión o revocación de un certificado, la fiabilidad de los sistemas y productos (los cuáles contarán con la debida protección contra alteraciones, así como con los niveles de seguridad técnica y criptográfica idóneos dependiendo de los procedimientos donde se utilicen), la comprobación de la identidad del titular del certificado, a través de las Oficinas de Registro y Acreditación autorizadas y, en su caso, —exclusivamente frente a la parte o entidad a través de la cual se ha identificado y registrado al titular del certificado— los atributos pertinentes, así como, en general, los que resulten de aplicación de conformidad con la normativa comunitaria o nacional correspondiente.

1.2. De desarrollo de las facultades establecidas en su normativa específica, realizando su actividad en los términos y con los efectos previstos en el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre, en especial:

- Funciones de comprobación, coordinación y control de las Oficinas de Registro y Acreditación, sin perjuicio de su dependencia, orgánica y funcional, de la Administración u organismo público a que pertenezcan.
- Resolución de los recursos y reclamaciones de competencia de la FNMT-RCM derivadas de la actividad convenida.

- Comunicación al Ministerio de Hacienda a los efectos de coordinación e interoperabilidad correspondientes para el desarrollo de la Administración electrónica y Acceso electrónicos de los ciudadanos a los servicios públicos.

2. El Tribunal Constitucional, realizará las siguientes actuaciones:

- Determinar, de acuerdo con lo previsto en el art. 85.2 LOTC, las condiciones de empleo *"de cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos"*.
- Realizar las actividades de autoridad de registro consistentes en la identificación previa a la obtención del certificado electrónico y, en su caso, de comprobación y suficiencia de los atributos correspondientes, cargo y competencia de los firmantes/custodios, a través de la Oficina de Registro acreditada ante la FNMT-RCM.
- Reconocer el carácter universal de los certificados de firma electrónica que expide la FNMT-RCM.
- Resolver los recursos y reclamaciones de su competencia.

3. Régimen de las Oficinas de Registro y Acreditación:

- General: El número y ubicación de las Oficinas de Registro y Acreditación donde se llevarán a cabo las actividades de identificación, recepción y tramitación de solicitudes de expedición de certificados electrónicos será el que se recoge en el Anexo II de este Convenio. Cualquier modificación o alteración de dicha relación o de la ubicación de las Oficinas deberá ser comunicada a la FNMT-RCM, quien dará la oportuna difusión para mantener permanentemente actualizada la relación de la red de Oficinas de Registro y Acreditación para la obtención de certificados electrónicos en los términos previstos en el Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre y resto de normativa aplicable.

Las aplicaciones informáticas necesarias para llevar a cabo las actividades de acreditación e identificación serán facilitadas por la FNMT-RCM. Tales aplicaciones serán tecnológicamente compatibles en función de los avances tecnológicos y el estado de la técnica.

Las solicitudes de emisión y revocación y/o suspensión, en su caso, de certificados se ajustarán a los modelos recogidos en el Anexo III y a la Declaración de Prácticas de Certificación de la Entidad accesible como en la dirección: <http://www.cert.fnmt.es/dpcs>

- Para los servicios del artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: El Tribunal Constitucional dispondrá de Oficina u Oficinas de Registro y Acreditación que deberán contar con los medios informáticos precisos para conectarse

telemáticamente con la FNMT-RCM. En ellas, la acreditación e identificación de los solicitantes de los certificados (ciudadanos y empresas, con o sin personalidad jurídica) exigirá la comprobación de su identidad y de su voluntad de que sea expedido un certificado electrónico y, en su caso, de las facultades de representación, competencia e idoneidad para la obtención del certificado correspondiente, verificándose de conformidad y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Las acreditaciones realizadas surtirán plenos efectos y serán válidas para su aceptación por cualquier Administración Pública que admita los certificados de emitidos por la FNMT-RCM.

- Para los servicios de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las Oficinas de Registro y Acreditación del Tribunal Constitucional dependerán orgánica y funcionalmente de él (sin perjuicio de las funciones de comprobación, coordinación y control de la FNMT-RCM) y determinarán la identidad y competencia del propio Tribunal Constitucional y la de los diferentes usuarios (firmantes/custodios) designados por la Administración titular de los certificados, de conformidad con la DPC General y las Políticas y Prácticas de Certificación Particulares de Administración Pública, disponibles para consulta en la Web:

<http://www.cert.fnmt.es/dpc/ape/dpc.pdf>

correspondientes a los certificados y sistemas de firma electrónica de este ámbito de aplicación y con los formularios y condiciones de utilización de cada tipo de certificado (Anexo III).

A tal efecto, el Tribunal Constitucional dispondrá de las Oficinas de Registro y Acreditación que considere necesarias para la acreditación de este tipo de certificados y deberán contar con los medios informáticos precisos para conectarse telemáticamente con la FNMT-RCM y realizar las solicitudes de emisión de los certificados. En estas Oficinas de Registro, donde se acreditarán e identificarán a los titulares y custodios de los certificados, se exigirá la comprobación de su identidad, del cargo y de las facultades de representación, competencia e idoneidad para la obtención del certificado correspondiente y de la voluntad del titular del certificado, verificándose de conformidad y con pleno respeto a lo dispuesto en la normativa aplicable.

CUARTA.- REEMBOLSO DE GASTOS

1. REEMBOLSO DE GASTOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

La FNMT-RCM percibirá anualmente, por los servicios recogidos en el Capítulo I (Servicios EIT), en el Capítulo II (Validación de certificados vía OCSP) y en el Capítulo III (Servicios AP) del Anexo I, prestados al Tribunal Constitucional, la cantidad total de 24.980,21 IVA excluido, cantidad ésta que viene de la anualidad última del Convenio firmado el 18 de diciembre de 2012 y de las dos prórrogas correspondientes a los años 2017 y 2018, a la que se tendrá que añadir el I.V.A.

En caso de que el período inicial de duración del Convenio sea inferior a un año, la cantidad anterior se prorrateará, reduciéndose proporcionalmente a su duración inicial.

Si hubiera petición expresa, por parte del Tribunal Constitucional, de extensión de otras funcionalidades de entre las recogidas en los Capítulos II y III, del Anexo IV, la cantidad anterior quedaría incrementada por el importe correspondiente que se dedujera de la aplicación de las tablas contenidas en dicho Anexo IV, de Precios y Plan de Implantación, del presente Convenio.

2. REEMBOLSO EN AÑOS SUCESIVOS

Para sucesivos años, se aplicará el mismo criterio en función de las compensaciones a percibir, servicios solicitados y prórrogas del Convenio.

3. FACTURACIÓN

El pago por los servicios prestados por la FNMT-RCM, que incluirá, en su caso, los servicios adicionales solicitados, se efectuará al comienzo de la prestación del servicio en cada anualidad.

El abono de las facturas se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la FNMT-RCM: (Código Cuenta : 0182 2370 49 0208501334 IBAN : ES28 0182 2370 4902 0850 1334 Código BIC: BBVAESMM), en un plazo no superior a treinta días de la fecha de factura.

Las facturas de la FNMT-RCM se emitirán a nombre de:

Denominación: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Calle: Doménico Scarlatti, 6
Población: Madrid
Provincia: Madrid – CP 28003
NIF/CIF: S2813013F
Departamento o persona de contacto: Gerencia

QUINTA.- PLAZO DE DURACIÓN

Esta Encomienda tendrá un plazo de duración de cuatro años (4), desde el día 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2022.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Si la prórroga tuviese una duración inferior a cuatro años, podrán acordarse sucesivas prórrogas hasta alcanzar el máximo de cuatro años.

Asimismo, el convenio se podrá extinguir en cualquier momento por acuerdo expreso de las partes.

SEXTA.- REVISIÓN

Las partes podrán proponer la revisión del Convenio en cualquier momento de su vigencia, a efectos de incluir, de mutuo acuerdo, las modificaciones que resulten pertinentes.

SÉPTIMA.- COMISIÓN

A instancia de cualquiera de las partes, podrá constituirse una Comisión Mixta con funciones de vigilancia y control, así como de resolución de cuestiones derivadas de los problemas de interpretación y cumplimiento del presente Convenio.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD

El Tribunal Constitucional y la FNMT-RCM, a los efectos previstos en el objeto de este Convenio, responderán cada una en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias, en relación con los daños y perjuicios que causara el funcionamiento del sistema de acuerdo con las reglas generales del ordenamiento jurídico que resultarán de aplicación y de conformidad con las obligaciones asumidas a través del presente Convenio.

NOVENA.- RESOLUCIÓN

El Convenio podrá resolverse a instancia de la parte perjudicada, cuando existieran incumplimientos graves de las respectivas obligaciones atribuidas en este instrumento.

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

1. RÉGIMEN

El régimen de protección de datos de carácter personal derivado de este Convenio y de la actuación conjunta de las partes, será el previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento

general de protección de datos-RGPD), en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y en su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RPD).

Los ficheros de la FNMT-RCM se crearon por la Orden EHA/2357/2008, de 30 de julio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (BOE núm. 190, de 7 de agosto). Actualmente, la Entidad ha creado un Registro de Actividades de Tratamiento y nombrado a un Delegado de Protección de Datos, con el fin de adaptarse a RGPD: <http://www.fnmt.es/rgpd>

Los ficheros automatizados de datos carácter personal y actividades de tratamiento existentes en el Tribunal Constitucional se crearon por Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1994 (BOE núm. 155, de 30 de junio), posteriormente sustituido por el Acuerdo de 21 de diciembre de 2006 (BOE núm. 1, de 1 de enero de 2007), y reformado por los Acuerdos de 26 de marzo de 2009 (BOE núm. 86, de 8 de abril) y de 28 de abril de 2010 (BOE núm. 105, de 30 de abril).

2. COMUNICACIÓN DE DATOS

La comunicación de datos de carácter personal que el Tribunal Constitucional realice a la FNMT-RCM sobre los datos de los empleados públicos de aquélla para la emisión de certificados de firma electrónica en el ámbito de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (y, en su caso, en el del art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), no requerirá consentimiento del interesado al estar, tal cesión o comunicación, amparada por el artículo 11.2.c) de la Ley Orgánica 15/1999, existiendo un interés legítimo de la Entidad ya que tal comunicación resulta ineludible para que la FNMT-RCM expida los certificados de firma electrónica a los empleados del Tribunal Constitucional.

3. ACCESO A LOS DATOS POR CUENTA DE TERCEROS (ENCARGADO DEL TRATAMIENTO)

No tendrá carácter de comunicación de datos el acceso que el Tribunal Constitucional, en calidad de Oficina de Registro y Acreditación de la FNMT-RCM, realice sobre los datos de carácter personal que la **FNMT-RCM** mantiene, **como responsable del fichero**, sobre sus usuarios, personas físicas, con la finalidad de solicitar los servicios EIT en el ámbito del art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, descritos en el presente Convenio. Tales datos son los que figuran en el fichero regulado en el número 5 del anexo de la citada Orden EHA/2357/2008.

De conformidad con el artículo 12 LOPD, el **Tribunal Constitucional** actuará en **calidad de encargado del tratamiento** por cuenta de la FNMT-RCM y asumirá las siguientes obligaciones:

- Tratará los datos conforme a las instrucciones de la FNMT-RCM como responsable del fichero en lo que se refiere exclusivamente a hacer efectiva la realización de las actividades contempladas en este Convenio y, específicamente, la de remitir una copia del contrato de solicitud y conservar otra de las copias.
- No aplicará o utilizará los datos con un fin distinto al que figura en el presente Convenio y sus Anexos.
- No los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
- Aplicará medidas de seguridad acordes con el tipo de datos que traten (las que se establecen en la Orden EHA/2357/2008 anteriormente citada).
- No almacenará innecesariamente datos personales en los accesos que se efectúen y, en caso de que se almacenen, una vez finalizado el presente Convenio, destruirá o devolverá al responsable del fichero los datos y soportes donde figuren, levantando acta del tal destrucción o devolución. No obstante, y con el fin de preservar los derechos del encargado frente a posibles responsabilidades derivadas de su actuación, en el supuesto referido en este apartado, el encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.

UNDÉCIMA.- DERECHO APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Sin perjuicio de la facultad de las partes de constituir la Comisión Mixta establecida en la cláusula octava, la colaboración administrativa prevista en este Convenio y Anexos en cuanto al contenido y características de los mismos se realizará con sujeción a la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; y en el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y su normativa de desarrollo.

El presente Convenio, instrumenta la encomienda que realiza el Tribunal Constitucional a la FNMT-RCM, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tiene naturaleza administrativa y se registrará por lo expresamente pactado por las partes en este documento, por las normas citadas en el mismo y, en su defecto, por las normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

Las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las incidencias que pudieran surgir en su interpretación y cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que se suscitaran



entre las partes durante el desarrollo y ejecución del mismo, se someterán, en caso de que sea de aplicación su intervención, al Servicio Jurídico del Estado y, en caso contrario, a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la misma.

El régimen de colaboración administrativa entre el Tribunal Constitucional y la FNMT-RCM, en cuanto al ejercicio de las respectivas competencias, se instrumenta a través del presente Convenio.

DUODÉCIMA.- ENTRADA EN VIGOR

El presente Convenio surtirá efectos desde el momento de su firma.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio y todos sus Anexos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TIMBRE REAL CASA DE LA MONEDA *Presidente*
Director General

Fdo.: Jaime Sánchez Revenga

Fdo.: Juan José González Rivas

**ADENDA DE PRÓRROGA AL CONVENIO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2018,
POR EL QUE EL «TRIBUNAL CONSTITUCIONAL» ENCOMIENDA A LA
«FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA», LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
ELECTRÓNICOS**

Madrid, a 5 de octubre de 2022

REUNIDOS

De una parte, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, Presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por Real Decreto 1038/2021, de 22 de noviembre (BOE núm. 280, de 23 de noviembre), en representación del Tribunal Constitucional [artículo 15 de la Ley Orgánica, 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 239, de 5 de octubre)], con domicilio en Madrid, calle Domenico Scarlatti, 6 (NIF S2813013F).

Y de otra parte, doña María Isabel Valldecabres Ortiz, Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, nombrada por Real Decreto 726/2021, de 3 de agosto (BOE núm. 185, de 4 de agosto), en nombre y representación de esta Entidad, según el artículo 19.2 del Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (BOE nº 161, de 7 de julio) con domicilio institucional en Madrid, calle Jorge Juan, 106 y NIF Q2826004J.

Ambas partes, reconociéndose respectivamente capacidad legal y competencia suficientes para formalizar la presente adenda de prórroga,

EXPONEN

PRIMERO.- Con fecha 27 de diciembre de 2018 ambas partes suscribieron el Convenio por el que el Tribunal Constitucional encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos.

SEGUNDO.- La cláusula quinta del citado convenio establece lo siguiente:

“QUINTA.- PLAZO DE DURACIÓN

Esta Encomienda tendrá un plazo de duración de cuatro años (4), desde el día 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2022.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Si la prórroga tuviese una duración inferior a cuatro años, podrán acordarse sucesivas prórrogas hasta alcanzar el máximo de cuatro años.

Asimismo, el convenio se podrá extinguir en cualquier momento por acuerdo expreso de las partes.”

CUARTO.- Dado que es del interés del Tribunal Constitucional continuar garantizando a los interesados que puedan relacionarse a través de medios electrónicos, y que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda está en disposición de continuar realizando las actividades técnicas y de seguridad relativas a la certificación y firma electrónica, según sus fines institucionales, ambas partes formalizan la adenda de prórroga prevista en la cláusula quinta del convenio suscrito el 27 de diciembre de 2018, sobre la base de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

Constituye la finalidad de esta adenda formalizar la prórroga del Convenio de 27 de diciembre de 2018, por el que el Tribunal Constitucional encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos, de conformidad con la cláusula quinta del mismo.

SEGUNDA.- DURACIÓN DE LA PRÓRROGA

Se establece un plazo de duración de la prórroga de un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la posible formalización de sucesivas prórrogas, hasta alcanzar un máximo de cuatro años, de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta del Convenio de 27 de diciembre de 2018.

TERCERA.- CONDICIONES

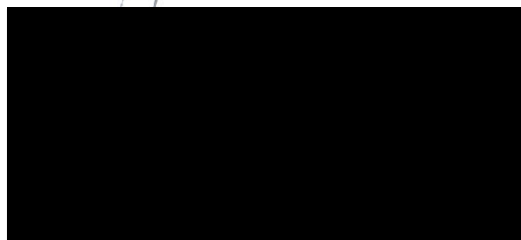
Se mantienen en su integridad las restantes condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en el Convenio de 27 de diciembre de 2018, por el que el Tribunal Constitucional encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos, y sus correspondientes anexos.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la presente adenda, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA
Directora General *Presidente*



Fdo.: María Isabel Valldecabres Ortiz



*Fdo.: Pedro José González-Trevijano
Sánchez*

SEGUNDA ADENDA DE PRÓRROGA AL CONVENIO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2018, POR EL QUE EL «TRIBUNAL CONSTITUCIONAL» ENCOMIENDA A LA «FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA», LA EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS

Madrid, a 3 de octubre de 2023

REUNIDOS

De una parte, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por Real Decreto 10/2023, de 11 de enero (BOE núm. 10, de 12 de enero), en representación del Tribunal Constitucional [artículo 15 de la Ley Orgánica, 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE núm. 239, de 5 de octubre)], con domicilio en Madrid, calle Domenico Scarlatti, 6 (NIF S2813013F).

Y de otra parte, doña María Isabel Valldecabres Ortiz, Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, nombrada por Real Decreto 726/2021, de 3 de agosto (BOE núm. 185, de 4 de agosto), en nombre y representación de esta Entidad, según el artículo 19.2 del Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que sea aprueba el Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (BOE nº 161, de 7 de julio) con domicilio institucional en Madrid, calle Jorge Juan, 106 y NIF Q2826004J.

Ambas partes, reconociéndose respectivamente capacidad legal y competencia suficientes para formalizar la presente adenda de prórroga,

EXPONEN

PRIMERO.- Con fecha 27 de diciembre de 2018 ambas partes suscribieron el Convenio por el que el Tribunal Constitucional encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos.

SEGUNDO.- La cláusula quinta del citado convenio establece lo siguiente:

“QUINTA.- PLAZO DE DURACIÓN

Esta Encomienda tendrá un plazo de duración de cuatro años (4), desde el día 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2022.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. Si la prórroga tuviese una duración inferior a cuatro años, podrán acordarse sucesivas prórrogas hasta alcanzar el máximo de cuatro años.

Asimismo, el convenio se podrá extinguir en cualquier momento por acuerdo expreso de las partes.”

TERCERO.- Conforme a lo anterior, con fecha 5 de octubre de 2022 se suscribió adenda de prórroga del convenio por un plazo de un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de la posible formalización de sucesivas prórrogas, hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

CUARTO.- Dado que es del interés del Tribunal Constitucional continuar garantizando a los interesados que puedan relacionarse a través de medios electrónicos, y que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda está en disposición de continuar realizando las actividades técnicas y de seguridad relativas a la certificación y firma electrónica, según sus fines institucionales, ambas partes formalizan una nueva adenda de prórroga prevista en la cláusula quinta del convenio suscrito el 27 de diciembre de 2018, sobre la base de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

Constituye la finalidad de esta adenda formalizar la segunda prórroga del Convenio de 27 de diciembre de 2018, por el que el Tribunal Constitucional encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos, de conformidad con la cláusula quinta del mismo.

SEGUNDA.- DURACIÓN DE LA PRÓRROGA

Se establece un plazo de duración de la prórroga de un año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, sin perjuicio de la posible formalización de sucesivas prórrogas, hasta alcanzar un máximo de cuatro años, de conformidad con lo previsto en la cláusula quinta del Convenio de 27 de diciembre de 2018.

TERCERA.- CONDICIONES

Se mantienen en su integridad las restantes condiciones jurídicas, técnicas y económicas establecidas en el Convenio de 27 de diciembre de 2018, por el que el Tribunal Constitucional encomienda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la extensión de los servicios públicos electrónicos, y sus correspondientes anexos.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la presente adenda, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA
Directora General

MARIA
ISABEL
VALLDECABRES

Presidente

CONDE-PUMPIDO
TOURON CANDIDO

Firmado digitalmente por CONDE-PUMPIDO

Fdo.: María Isabel Valldecabres Ortiz

Fdo.: Cándido Conde-Pumpido Tourón